

XLVIII Legislatura

DIVISIÓN PROCESADORA DE DOCUMENTOS

Nº 1797 de 2018

S/C

Comisión de Asuntos Internacionales

DELEGACIÓN "CARAVANA DE SOLIDARIDAD CON NICARAGUA"

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 27 de agosto de 2018

(Sin corregir)

Preside: Señor Representante Roberto Chiazzaro, Vicepresidente.

Miembro: Señor Representante Tabaré Viera Duarte.

Asisten: Señores Secretario Vladimir De Bellis y Prosecretario Bernardo Pollero de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Invitados: Por la Delegación "Caravana de Solidaridad con Nicaragua" señoras Ariana McGuire Villalta, Carolina Hernández Ramírez y señores Yader Parajón Gutiérrez y Mauro Mazzini.

Secretario: Señor Gonzalo Legnani.

Prosecretarios: Señores Daniel Conde Montes de Oca y José Fasanello.

═════||═════

SEÑOR PRESIDENTE (Roberto Chiazzaro).- Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Asuntos Internacionales tiene el gusto de recibir a la delegación de la Caravana Internacional de Solidaridad con Nicaragua, integrada por las señoras Ariana McGuire y Carolina Hernández, y por los señores Yader Parajón y Mauro Mazzini.

Dicha delegación constituye una articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y ha pedido a esta Comisión ser recibidos para ponernos al tanto, más allá de lo que hemos podido averiguar, de la situación que está atravesando la República de Nicaragua en estos momentos.

Este es el Poder Legislativo, integrado por distintos partidos políticos, y una de las tareas que tenemos, justamente, porque entendemos que esta es una casa del pueblo, es recibir a las distintas delegaciones de los países hermanos que quieran plantear alguna problemática.

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- Vengo en representación de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, que es una instancia de articulación de distintas expresiones universitarias en todo el territorio nacional, incluyendo la costa caribe.

Me acompañan Yader Parajón, por el movimiento Madres y Familiares de Abril, y Carolina Hernández, por el movimiento contra la minería industrial.

Nuestra gira incluye cinco países. Empezamos con Chile. Luego estuvimos en Argentina y ahora estamos en Uruguay. Nos espera todavía una semana en Brasil y otra en Perú.

La idea es que en esta gira podamos denunciar, a nivel internacional, todos los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua, los saldos terribles de personas asesinadas, secuestradas, enjuiciadas, criminalizada su protesta y, en general, toda la falta de institucionalidad y de herramientas en la Constitución y en el derecho nacional, que nos permitan hacer frente a las arbitrariedades que comete el Gobierno y las fuerzas policiales y, en ese sentido, toda la estructura estatal que está al servicio de Daniel Ortega.

Para nosotros ha sido bastante difícil encontrar alternativas políticas dentro de Nicaragua, por esta misma situación de represión que ha escalado sus formas de violencia desde el 18 de abril. Queremos dejar claro que el 18 de abril no es ningún punto de partida, sino más bien un punto de llegada. El 18 de abril es el día que se mostró la punta del *iceberg;* un *iceberg* que incluía ya más de una década de traiciones a los ideales solidarios con el pueblo nicaragüense desde las instancias de un gobierno que se asume de izquierda, además de una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente, en aquel entonces, de las comunidades rurales, de las comunidades campesinas, que toda la vida han vivido militarizadas por el ejército, en función de expropiar a la gente de sus territorios y de sus recursos naturales.

Sucede que, por la última década, el gobierno de Daniel Ortega se ha encargado de modificar la Constitución, de hacerse de los poderes de la Asamblea Nacional. De los noventa y dos diputados que tiene la Asamblea Nacional, más del 80% son de la bancada del Frente Sandinista, y los que quedan haciendo, supuestamente, partidos de oposición simplemente son partidos satélites. Nosotros les decimos partidos zancudos, porque no hacen ningún tipo de oposición, ningún tipo de alternativa, y solamente están ahí para complementar y reforzar todos decretos e iniciativas de ley que promueve el presidente, y que son aprobadas todo el tiempo, de forma unánime en tiempo récord de dos horas. Tal

es el caso de la Ley N° 840, que otorga una concesión canalera a un empresario chino por más de cien años, así como otras que son de trascendencia nacional. Otra de las leyes es la que se aprobó más recientemente, el 20 de julio de este año. Se trata de la ley antiterrorismo y contra el financiamiento para la producción de armas de destrucción masiva. Esta es la ley que acaba de sacar Daniel Ortega el 20 de julio, con la cual está criminalizando a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, a líderes estudiantiles, a personas que han estado participando de la mesa de diálogo nacional, que ahora está parada por falta de voluntad política, y también a personas que, incluso, tenían medidas cautelares otorgadas por la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y que, en este momento, están apresados en cárceles de detención ilegal y tortura, como es el Chipote. La cárcel que usaba el dictador Somoza es la que está utilizando Ortega hoy para apresar y torturar a la gente. Hay testimonios de sobra, hay evidencia de sobra; el material gráfico y audiovisual para dar cuenta y demostrar todos estos crímenes y estas formas enormes de represión son bastantes. Tenemos sistematizado todo un cúmulo de información que no hay dónde esconder.

Por otro lado, el tema de los medios de comunicación en Nicaragua es una barrera, porque no permite que la información fluya, ya que la mayoría de los canales son de hijos de Daniel Ortega. Se trata de canales que fueron comprados a través de la cooperación venezolana, que se utilizó toda la vida a discreción. Entonces, ahora solo tenemos tres canales independientes. Y estos tres han estado siendo asediados durante las últimas dos semanas, ya que el gobierno, por la fuerza y la intimidación, quiere comprarlos. Pero como los canales dijeron que no se iban a vender al gobierno, se acaba de iniciar una investigación por lavado de dinero a los directores de estos canales.

Otra cosa que está sucediendo es que Daniel Ortega ha puesto y quitado a todos los funcionarios públicos y directores del Estado, ya que él es el que decide quién entra y sale de esos espacios en función de la lealtad que le tengan.

Por otra parte, en 2014, Daniel Ortega reformó la ley de la policía y del ejército nacional y se puso como jefe supremo de estas dos fuerzas armadas. Entonces, la policía y el ejército responden directamente a las órdenes de Daniel Ortega, ya que no hay ningún otro ministerio de gobernación o derivado.

Hago este comentario porque el viernes Daniel Ortega nombró como director oficial de la policía nacional a su consuegro, Francisco Díaz. Este señor es consuegro de Daniel Ortega y de Rosario Murillo -que es la vicepresidenta, esposa del presidente- y el padre de la esposa de uno de sus hijos; por lo tanto, todo está en familia. Lo nombró a él y al comisionado Avellán, que fue el comisionado que dirigió la masacre contra el pueblo indígena de Monimbó en Masaya, en donde se asesinaron más de treinta personas.

Entonces, Daniel Ortega lo promovió a subdirector de la policía, y lo primero que hicieron fue hacer una cacería selectiva de líderes sociales y, principalmente, de líderes estudiantiles. En este caso, quiero denunciar la detención ilegal de mis compañeros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. El domingo fueron apresadas veintitrés personas, diecinueve de la Coordinadora Universitaria, que son estudiantes universitarios. Estas personas estaban en Jinotepe; desde allí los siguió una camioneta de policía, los paró y los apresó sin ningún motivo de detención. Lo que hicieron fue interrogarlos, maltratarlos psicológicamente y tomarle todos sus datos, sus huellas, y videos, pero como no había un motivo de detención y hubo una masiva movilización de la ciudadanía y de los grupos de derechos humanos fueron liberados de la cárcel de tortura que está en Chipote. Entre esas personas había tres documentalistas extranjeros: una brasileña, un estadounidense y una productora nicaragüense. A los dos extranjeros los

llevaron directo a Migraciones, les robaron sus cámaras, sus discos duros y sus equipos, y los sacaron del país.

Luego, cuando mis compañeros fueron puestos en libertad, en forma simultánea, agarraron a seis compañeros más que estaban en una manifestación en León: Levis Rugama, Yaritza Mairena, Victoria Obando de la Coordinadora Universitaria, y Byron Estrada, Luis Quiroz y Nairobi Ribas, que son líderes y dirigentes estudiantiles. En este momento estos estudiantes están en la cárcel de Chipote, y posiblemente están siendo torturados. La familia no ha podido entrar para saber qué está pasando con ellos; no hay derecho a hacer llamadas ni a poner un abogado, y no hay información oficial.

En ese sentido, los grupos que se generaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, el Meseni y el GIEI, que es el grupo de expertos internacionales que desde hace dos meses está realizando un trabajo territorial en Nicaragua, denunció que en las últimas tres semanas el gobierno está bloqueando las misiones de trabajo y que las instituciones y autoridades no le están dando la información que necesitan para realizar sus investigaciones y monitorear todos los procesos de violación a los derechos humanos, que es el propósito principal que tenían estos grupos.

Sumado a eso, el 2 de agosto, en la sesión especial que se llevó a cabo en la OEA, se conformó un grupo de doce países -incluidos muchos países del sur- para dar seguimiento especial al caso de Nicaragua. Como saben, por un decreto oficial publicado el 12 de agosto, Daniel Ortega manifestó que este grupo conformado por la OEA está financiado por el gobierno de Estados Unidos y que está apoyando a una derecha que quiere dar un golpe de Estado para derrocar su gobierno.

Entonces, hace parecer la situación como una intervención estadounidense -una especie de golpe de Estado-, y dice que estas personas no son bienvenidas a entrar al país, y que no lo van a hacer.

Por lo tanto, en Nicaragua no tenemos instancias para darle salida a la crisis, y no tenemos la posibilidad de que grupos del exterior especializados en este tipo de temas puedan entrar a Nicaragua para ayudarnos a solucionar esta crisis. Entonces, ahora estamos como en un limbo de derechos, tanto nacional como internacional, porque la cosa no avanza mucho por la falta de voluntad política de Daniel Ortega y de su fuerza de represión.

En Nicaragua, además de la lista de las cuatrocientas cincuenta personas que fueron asesinadas, principalmente, por francotiradores de la policía y los grupos paramilitares que son financiados y dirigidos por el gobierno de Daniel Ortega y toda su maquinaria asesina, además de los mil ochocientos heridos que quedaron lisiados para siempre porque perdieron un ojo por una bala, o perdieron una parte de su cuerpo porque tuvieron que amputársela debido a que el daño ocasionado por una bala había sido demasiado, además de eso, además de las cuatrocientas personas que fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares, hay muchísimos videos en donde se ve a los grupos paramilitares capturando a la gente, la que después no aparece; inclusive, en algunos casos estos desaparecidos aparecen muertos, tanto en las calles como en el Instituto de Medicina Legal. Y ahora, más recientemente, tenemos una lista que supera los doscientos prisioneros políticos que están siendo acusados por terrorismo y que no tienen condiciones legales para una legítima defensa.

Además de eso, la economía de Nicaragua se está yendo a pique porque el principal rubro económico de la última década ha sido el sector turismo, pero ante la falta de seguridad ciudadana, lógicamente, los inversionistas se fueron y cerraron las empresas. Entonces, los tres de cada diez nicaragüenses que teníamos empleos

formales fuimos despedidos. Desde el mes de abril a la fecha se produjeron trescientos mil despidos y una migración masiva, un éxodo enorme de nicaragüenses saliendo principalmente para Costa Rica y otros países de la región. Solo en Costa Rica hay más de treinta mil solicitudes de asilo político en los últimos dos meses. Hay una crisis humanitaria enorme allá, los nicaragüenses están viviendo en condiciones infrahumanas en el país vecino porque en Nicaragua, aunque tienen su casa y mejores condiciones, tal vez, no tienen garantizado el derecho a la vida.

Hay toda una problemática; el Gobierno ha sacado en los últimos dos meses más de US$ 700.000.000 de las reservas del Banco Central de Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua acaba de publicar una reforma a la ley del Banco Central donde se prevé una devaluación progresiva del valor del córdoba con relación al dólar.

Según los economistas, hay una alta posibilidad de que los bancos entren en crisis financiera por la falta de liquidez de dólares y, finalmente, quiebren porque la mayoría de los préstamos son en dólares. Entonces, se ha sacado ese dinero para financiar a los grupos paramilitares. Sumado a todo esto, el gobierno de Daniel Ortega, hace dos semanas, hizo una reforma al presupuesto general de la República. Los sectores afectados por esta reforma, obviamente, son: educación -se le quita el 6 % constitucional a la inversión de educación pública, principalmente universitaria-, salud e inversión en obras públicas. ¿Y a quién se le aumenta el presupuesto? Obviamente, a la fuerza policial, a la Asamblea Nacional y al Consejo Supremo Electoral. Entonces, se rebaja en educación, salud e inversión pública y se le suma a la policía, al sistema electoral y a la Asamblea Nacional, que es la maquinaria que le permite a Ortega estar donde está.

Hay una crisis generalizada, la gente vive con temor, los estudiantes y todos los líderes han tenido que salir de sus casas, viven en la clandestinidad, viven escondidos. Todas las orejas del presidente en los distintos barrios y localidades están haciendo listas de gente que, de una u otra manera, ha participado o ha apoyado las manifestaciones pacíficas de la población. Los grupos paramilitares están llegando a las casas de seguridad donde hemos tenido que resguardarnos y están secuestrando a los chavalos de estas casas o los están matando dentro de las casas.

Realmente, nos sentimos muy impotentes en el sentido de que a nivel de derecho no tenemos muchas herramientas más que la voluntad de transformar esa realidad, a esto se debe la gira que estamos haciendo. Nuestra misión es denunciar todos estos crímenes y desmentir todas las versiones que Daniel Ortega ha dado internacionalmente. Nada de lo que Daniel Ortega está diciendo es verdad. Nada de lo que Daniel Ortega está diciendo tiene legitimidad o apoyo popular; nada.

Estamos acá para observar los gobiernos en el sur, los partidos políticos, los movimientos de base social, los grupos estudiantiles que, además, tienen amplia trayectoria y experiencia en temas de transición democrática, posdictaduras, posguerras, procesos reflexivos de historia, de memoria. Es decir, tienen un trabajo avanzado en eso. Este fue un trabajo que no hicimos en Nicaragua después de la revolución del setenta y nueve; prueba de eso es que se siguen utilizando las mismas cárceles para torturar a la gente en las mismas condiciones políticas.

Estamos aquí para solicitar el apoyo y el respaldo de ustedes como instancia diplomática, como instancia parlamentaria, pero también de otros espacios que corresponden más a lo social.

¿Qué hicimos en Chile, por ejemplo? Como a esta misión especial de la OEA no la van a dejar entrar porque se aduce que es financiada por el Gobierno de Estados Unidos, lo que queremos crear es una red de trabajo en el sur con espacios como este. Esto fue

ampliamente aceptado en la Cámara de Diputados de Chile, incluso por partidos que antes apoyaban al Frente Sandinista como, por ejemplo, el Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista, al igual que todos los demás, estuvieron de acuerdo, en principio, en actualizar el pronunciamiento que ya habían sacado y explicar que la fuerza represiva ha variado en su forma y en su dinámica; que se mantiene pero ha mutado, se ha transformado en otra cosa.

Se actualizó el pronunciamiento, condenando la violencia en Nicaragua, condenando la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega, pero, además, generando esta red de apoyo, de trabajo que pueda en algún momento hacer una visita a Nicaragua, ver la situación y generar alternativas de solución a la crisis. Estas alternativas de solución incluyen, por ejemplo, un plan para el desarme de los grupos paramilitares, un desarme monitoreado por esta comisión de trabajo en el sur, pero también por la ONU o el grupo que se generó en la OEA y toda la gente con experiencia en el tema de desarme de grupos armados.

La idea es que esta Comisión, además de monitorear este proceso, pueda monitorear la salida pacífica de Daniel Ortega, de su familia y acompañar a los nicaragüenses en términos de reconstitución democrática. Es decir que se pueda apoyar el plan de ruta a la democratización que ya existe por parte de la articulación de movimientos sociales que representa la coalición de todos los movimientos sociales de todos los sectores organizados en el país: feministas, campesinos, pueblos indígenas, afrocaribeños, sector de salud, de educación, etcétera. También sería importante que se pudiera conformar -como lo establece la ruta a la democratización- una junta de gobierno colegiada, de transición, que prepare las condiciones para diluir toda la Asamblea Nacional que está viciada, que son un montón de corruptos. La Asamblea Nacional durante la crisis se ha hecho dos aumentos salariales del 5% cada uno en cuatro meses. ¡Dos aumentos salariales con la crisis que está atravesando el país! O sea, tienen megasalarios, nadie gana como ellos en toda la región.

Por tanto, la idea es que puedan acompañar este proceso de reconstitución de la ley electoral, de una constituyente que reforme nuevamente la Constitución nacional, que quite los cambios que se habían adherido por parte del gobierno de Daniel Ortega donde plantea, por ejemplo, la reelección indefinida o donde establece que su esposa puede ser la vicepresidenta en un sistema totalmente nepótico. Además, que se pueda apoyar un posible próximo proceso electoral, que se conformen nuevos partidos políticos, que esa junta de gobierno le dé espacio a la ciudadanía para prepararse para proponer nuevos grupos que surjan a partir de todo este proceso, realizando un nuevo evento electoral justo, democrático, con observación internacional, que represente realmente a los distintos sectores que en Nicaragua estamos participando, que son todos.

En Nicaragua la encuestadora Cid Gallup hizo una encuesta en julio para ver cuál era el apoyo popular que le quedaba al gobierno de Daniel Ortega. Los resultados señalan que del 38 % histórico que lo ha apoyado toda la vida, se queda con un 10 % a un 15% de respaldo popular, que son las personas que todavía tienen puestos en las instituciones del Estado y que están siendo obligados a jurar lealtad al gobierno de Daniel Ortega porque, de lo contrario, son amenazados al igual que sus familias. Hay documentos que prueban esto; de forma institucional hay una amenaza si no se jura lealtad al comandante.

Al final de la reunión, podemos entregarles una carpeta con información donde está todo esto que digo, las evidencias de los casos que he mencionado y, por supuesto, el plan de transición democrática que estamos pensando que se puede realizar en Nicaragua. Estamos ante una situación grave.

Si quieren pueden hacernos preguntas y si algo no les queda claro, podemos hablarlo ahora.

SEÑOR PARAJÓN (Yader).- Vengo como delegado del Movimiento de Madres de Abril. Nuestro movimiento surgió debido a la necesidad del contexto; somos un movimiento autónomo e independiente.

En primer lugar, voy a contar que las víctimas han sido asesinadas por la fuerza letal, por personas que son profesionales en la materia. Todos han sido asesinados con disparos certeros en la cabeza, en el cuello, o en el tórax. En mi caso personal, asesinaron a mi hermano el 11 de mayo, sobre la una de la mañana, y fue todo un plan, porque ya había habido un primer ataque. A mi hermano lo asesinan por un simple hecho. Daniel Ortega llama a su gobierno solidario, socialista y cristiano, pero le está imputando al pueblo nicaragüense el hecho de solidarizarse. Nosotros el 19 de abril nos solidarizamos -hasta que asesinan a mi hermano- en diferentes actividades, como recaudar dinero para llevar víveres y agua. En eso me involucré yo a nivel personal, y mi hermano, al ser yo universitario, empatiza con la lucha y con mi posición de universitario, por lo que hacíamos compras y con nuestros recursos económicos realizábamos estas actividades en varias ocasiones.

Esa noche del jueves 10 de mayo, en la que él parte de mi casa a las nueve de la noche, nosotros íbamos hacia el recinto universitario Upoli que los muchachos habían ocupado, que fue ícono de la insurrección, pero yo no logro trasladarme ya que mi papá no me deja, puesto que seis meses antes -exactamente- falleció mi madre. Entonces, mi hermano se decide por voluntad propia a ir, ya que mi papá no nos deja ir a los dos, sino a uno. El punto es que se va él con otros de sus amigos -también amigos míos- y llega sobre la finalización de un primer ataque o una primera emboscada; hay un momento de descanso porque necesitan traer más fuerzas -más activos- y ahí alrededor están sitiados por más de ciento cincuenta o doscientos armados, en el recinto. Refuerzan a estos armados, llegan aproximadamente doscientos más, y terminado ese descanso, hay un segundo ataque, en el que asesinan a mi hermano, aunque ya había habido un asesinado sobre las once de la noche.

Mi hermano parte a las 9 de noche y a las once de la noche, producto de un primer ataque, ya hay un asesinado que es Kevin Valle. Yo dialogo con él por medio del celular y así nos vamos monitoreando hasta que llega un momento en que por la red social Whatsapp los amigos de él -amigos míos en común- nos avisan, sobre la una y media de la mañana, que le han disparado a mi hermano. Los amigos de él, que están cuando lo asesinan, relatan que ellos estaban llevando los víveres y el agua cuando en ese segundo ataque los ciegan con bombas lacrimógenas. Estamos hablando de que había oscuridad y de que el alumbrado público había sido suspendido en varias ocasiones y el caso de estos muchachos no fue la excepción. Entonces, le ponen bombas lacrimógenas y, por consiguiente, lo franquean y le dan un disparo certero en la tetilla izquierda, lo cual le provoca la muerte, ya que le daña el corazón y pulmón.

El Movimiento de Madres ha tenido una segunda situación ya que estamos siendo revictimizados por Ortega por el simple hecho de denunciar la situación ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como la CIDH. Nos amenazan de muerte y hay una campaña de desprestigio de los Ortega hacia las madres y los hermanos en diferentes medios de comunicación. Ahorita, los medios oficialistas están diciendo que somos un montón de delincuentes, e incluso, que los muertos no existen. Cabe señalar que también hay asesinados no solo por esta fuerza letal, por francotiradores, sino por negligencia médica, ya que por una orden de Rosario Murillo en conspiración con Sonia Castro, que es la ministra de salud, se niega la atención médica a

ciertos heridos, como el caso de Álvaro Conrado y algún otro; sus padres pagaban el seguro social en estas clínicas provisionales por lo que tenían obligación de atenderle, pero por órdenes de Sonia Castro -que obedecen a órdenes de Rosario Murillo- la atención le fue negada. Así muere otro centenar de muchachos -como decía Ariana-, y sumamos más de cuatrocientos cincuenta. Entonces, unos mueren por disparos certeros y otros por negligencia médica.

Otro punto es que el Movimiento de Madres se solidariza con las madres de los presos políticos, aunque por situaciones de tiempo, no queremos abundar en tanta información. Hay más de doscientos presos políticos y la estrategia es sobre la ley del terrorismo. Es una cacería humana; están sacando a los muchachos de sus casas y no tienen oportunidad de recibir la visita de un familiar ni derecho de tener un abogado o hacer una llamada. Entonces, los presos políticos ahorita están siendo un referente, ya que no se les da ninguna oportunidad. Nosotros, a nivel del movimiento, hemos buscado la ruta de la justicia en las instituciones públicas del Estado, pero la Fiscalía engaveta, guarda y tira a la basura los casos y no los toma en cuenta ni como muerte violenta ni como violación de los derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos también es un brazo político de Daniel Ortega y ha transgredido todos los niveles de violación de los derechos humanos.

Otra situación mucho más difícil es que Ortega sigue apostando a que haya más muertos, porque la idea de base de la que él partió el 19 de abril, cuando se dio toda una insurrección cívica, es la ley del plomo. No hay ninguna otra medida; no hay una medida para dialogar. En su momento, él pensaba que iba a manipular el diálogo, pero al verse acorralado, no logra manipularlo, porque hay una presión social, con las calles tomadas y barricadas.

Hay una situación de inestabilidad económica, pero los únicos terroristas y los únicos obstáculos para un diálogo acerca de una salida ordenada y pacífica se llaman Daniel Ortega y Rosario Murillo. La única terrorista es la familia presidencial; se trata de todo un sistema para el que él ha venido creando una antesala a fin de generar todos los procesos de manera legal, dentro de todo lo ilegítimo, tratando de logar su perpetuidad mediante órdenes legales. Como decía Ariana, ha venido reformando la ley, y todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Doctoral y de la misma Asamblea, son de facto; son personas que han estado ahí más de veinte años y tienen un montón de prebendas económicas, por lo que la situación es deplorable.

También quiero decir -para ir cerrando y que agregue algo más Carolina- que nosotros exigimos la justicia sin impunidad, pero esa justicia no se puede dar estando Daniel Ortega en el poder, y mucho menos, quedándose como uno más. No puede haber amnistía para Daniel Ortega, porque si se queda, va a crear nuevamente toda una red con su brazo político a nivel judicial, para que no se haga justicia y para que los verdaderos líderes que han dirigido esta masacre no sean juzgados; si no, van a inculpar un montón de chivos expiatorios.

Entonces, Daniel Ortega tiene que dimitir del poder porque con él no va a haber justicia. Esto es, por ejemplo, como si una niña violada tuviera que soportar a su violador hasta que llegara el día del juicio. Eso no se puede hacer; en nuestra posición, eso no es posible; es inadmisible que Ortega siga en el poder y en nombre del movimiento así lo digo: es inadmisible, y les he dado ese ejemplo gráfico ya que con él en el poder no puede haber ningún tipo de justicia.

Esa es nuestra preocupación y el gran llamado de alerta también es por el desarme y la renuncia de Ortega, para la cual nosotros pedimos su compromiso diplomático o su solidaridad diplomática, para que más madres y familiares nicaragüenses no sigan

engrosando nuestras filas. Ya tenemos más de cuatrocientos asesinados, lo que ha afectado a centenares de familias y yo, por lo menos, a título personal, no quisiera que una madre nicaragüense más se sumara a mi movimiento.

SEÑORA HERNÁNDEZ (Carolina).- Soy representante del Movimiento Nacional frente a la Minoría Industrial. Somos un movimiento que nació hace más de cuatro años, porque vivimos la represión en carne propia. El gobierno, prácticamente, ha concesionado nuestro territorio, ha entregado nuestra soberanía a las trasnacionales, sin derecho a decidir, y nosotros nos oponemos. Estamos en territorios que prácticamente viven de la minería artesanal, de la extracción de oro.

Laureano Ortega, de Pronicaragua, es el encargado de traer la inversión extranjera al país y sin hacer una consulta previa se nos han impuesto distintos proyectos mineros en diferentes sectores. Por oponernos, nuestras comunidades han sido militarizadas; los líderes de nuestros movimientos han sido enjuiciados por las trasnacionales, por el simple hecho de protestar. No se nos ha dejado manifestarnos libremente y lo peor es que tampoco a los medios de comunicación, aun viviendo tantas cosas, tanta represión, criminalización, represión, enjuiciamientos. Uno de los líderes de mi movimiento, por oponerse, fue encarcelado en el Chipote, la cárcel que utilizaba Somoza, durante más de cuarenta días, por el simple hecho de protestar y prácticamente lo que habían implementado era el miedo.

La verdad es que nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho de manifestarnos, porque prácticamente nos están expropiando nuestra tierra. No es una manera en que el gobierno pueda tratar con su pueblo. Él prácticamente controla el 80% de los medios de comunicación. Nuestras comunidades son militarizadas, están con muchos conflictos sociales y los medios de comunicación no trasmitían nada. Llegaban algunos periodistas y nos decían que no sabían nada. Nosotros llamábamos a los periodistas para preguntarles por qué y tal vez en Nicaragua no sabían la represión que nosotros estábamos viviendo. Y la respuesta era: "Es que llegué al canal y me dijeron que si trasmito esto, voy a trabajar un día. Después, ya no voy a trabajar nunca más". Hasta a ellos los reprimían, y tenían derecho a hacer su trabajo.

Entonces, al final, la represión ha nacido desde antes y han mantenido en el exilio, igual que la lucha del movimiento campesino, que tiene más de cuatro años de luchar, porque prácticamente te están expropiando tu tierra. No están escuchando, ni siquiera el diputado, que no lo conozco. Yo vivo en el departamento de León y mi movimiento representa a cuatro departamentos de Nicaragua, que son sectores mineros y ni siquiera buscamos reunirnos con el diputado para decirle: "Mirá, nosotros nos oponemos a esto".

Mi comunidad fue militarizada por más de tres meses y medio, y durante las veinticuatro horas cuidábamos el único punto de acceso que tenía la empresa. Ellos necesitaban hacer un estudio para que el Banco Mundial desembolsara y pudieran ejecutar su proyecto. La única entrada que había la bloqueamos. Éramos mujeres, niños, ancianos, porque era nuestra tierra, nuestro territorio el que defendíamos. Al final, nunca el diputado se sentó a escucharnos. ¿Por qué nos militarizaron? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos están enjuiciando? ¿Cómo una trasnacional va a llegar a enjuiciar? Porque no son de Nicaragua, sino de otros países y no van a llegar a enjuiciarte en tu propio país. Es una violación de los derechos humanos, y al diputado, ni siquiera le conocíamos la cara. Cuando hablábamos, decía: "Es que yo no sé. Es que yo no sé".

Entonces, ha existido una complicidad tremenda entre el Estado, las alcaldías municipales y el mismo Marena, que es el organismo encargado de velar por el medio ambiente y la protección de los recursos naturales. No han hecho consultas previas.

El 13 de julio, la empresa privada llama a paro nacional como símbolo de repudio y protesta a los asesinatos y a todo lo que está viviendo el país. Una de estas empresas, que es la que está plantada en mi comunidad y se llama Condor Gold, decide hacer la "consulta previa" -entre comillas-, llevando a personas de otras comunidades, que se veían en nada perjudicadas por este proyecto. Nosotros nos opusimos rotundamente, hicimos marchas y todo. En un momento, yo estoy grabando, diciendo que nos oponemos a este proyecto porque somos los dueños de nuestra comunidad, y soy agredida por una trabajadora de la trasnacional; pueden ver la cicatriz de la herida. Me quitó mi teléfono y como estaba mostrando una marcha bastante grande, donde estábamos con pancartas repudiando lo que sucede, me agredió.

Hemos tenido la información en nuestra contra, porque no es algo que todo el mundo sepa. Entonces, distintos sectores nos hemos organizado como movimiento para hacer nosotros mismos de periodistas. No tenemos la experiencia, pero hemos utilizado las redes sociales como un arma para demostrar que todas esas consultas no son válidas y rotundamente negarnos a que se realice el proyecto.

Ahorita, a pesar del grave problema sociopolítico que está viviendo el país, esta semana, el Gobierno otorgó dos concesiones y la semana pasada dio la concesión de mi comunidad. Prácticamente, ha otorgado tres concesiones mineras y nosotros nos preguntamos qué trasnacional va a llegar a invertir a Nicaragua, con la grave situación por la que está pasando. También el movimiento campesino ha sufrido una gran represión, al igual que la zona del Caribe. Al final, la represión ha existido desde siempre y ha producido exiliados. Ni siquiera el propio país se da cuenta de toda la situación que hemos vivido.

Esta represión no nació en 2018, sino antes. Como les digo a mis compañeros, nosotros estábamos acostumbrados a que nos reprimieran, a que nos militarizaran, hasta a que nos golpearan, pero a que nos mataran, no, y debido a esa grave situación, este movimiento decidió organizarse, porque la verdad es que para nosotros es duro, como nicaragüenses, que nos digan que somos una derecha golpista. ¡¿Cómo vamos a ser una derecha golpista?! Nosotros no lo reconocemos como presidente de Nicaragua porque está asesinando a los jóvenes. Ha matado familias. Una familia murió totalmente calcinada por el simple hecho de solidarizarse con los chavales universitarios y llevarles colchones. Un niño de seis meses, una niña de un año y su familia fueron asesinados para nosotros tengamos miedo, que nos callemos, que no hablemos, pero la verdad es que no podemos callar tanta injusticia.

Estamos viviendo en un Estado terrorista, donde no podemos opinar. Dice la Constitución de Nicaragua que vivimos en un país libre de expresión, y no es cierto. La ley de terrorismo que se aprobó el 20 de junio es la que están aplicando a los nicaragüenses y es la misma ley que nos van a aplicar a nosotros por el simple hecho de estar participando de esta Caravana Internacional de Solidaridad con Nicaragua, por el simple hecho de expresar lo que hemos vivido. Y no nos pueden decir que es mentira que a él le mataron a su hermano, que a los chavales los están asesinando, que están matando a la gente que está protestando, que no existe seguridad en ninguna parte, porque la policía, los paramilitares están en todo el país.

Prácticamente, la educación en Nicaragua ahorita no es un privilegio para nosotros, porque no tenemos seguridad en ninguna parte, ni en nuestras propias casas. La verdad es que los niños tienen temor: ¿por qué esa gente está armada? Es muy difícil para nosotros como nicaragüenses. Como les digo, no lo reconocemos como nuestro presidente, porque él no piensa por nosotros. Él no quiere dejar el poder, pero nosotros decimos que en menos de cuatro meses ha asesinado a 447 personas. Entonces, si en

un país de alrededor de 5.000.000 de habitantes, en tres meses han asesinado a tantos, de aquí a 2021, ya no va a haber nicaragüenses, a todos nos van a matar.

No estamos de acuerdo y repudiamos todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Tenemos que denunciarlo. No nos podemos quedar callados.

Sabemos que la solidaridad internacional nos va a ayudar. Estuvimos en Chile, en Argentina y sabemos que también han vivido dictaduras. El apoyo internacional nos va a ayudar a salir de esto. Estamos viviendo un problema muy difícil. Para nosotros también es muy duro estar aquí, estar contando, y todavía no hemos podido digerir la situación. Yo digo: estoy viviendo en mi país una película de terror, porque es algo muy tenebroso. Nos han quitado la vida en el sentido de que cada día estamos viendo más asesinatos, la persecución y la criminalización son más fuertes, y no sentimos que haya un mecanismo que nos proteja. Ahorita, nosotros estamos corriendo riesgos y también nuestras familias. No hay nada que diga: a estas personas no les pueden hacer nada. Medardo Mairena, el líder del movimiento campesino tenía medidas cautelares y fue apresado en el aeropuerto. Si nosotros tenemos medidas cautelares en el país, eso no interesa, te matan, te desaparecen. Esto es algo que no se puede estar dando. Como les dije, nosotros no lo reconocemos como nuestro presidente, porque está asesinando a los jóvenes, violando los derechos humanos. Es un gobierno autoritario totalmente. No lo reconocemos. Como nicaragüenses tenemos que denunciar todas estas arbitrariedades que estamos viviendo. Es muy difícil, pero es la verdad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Nosotros estamos agradecidos por el testimonio que están dando, y comprendemos la situación emocional que ustedes están viviendo que, por cierto, ha de ser muy difícil.

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Le damos una vez más la bienvenida a esta delegación.

La verdad es que seguimos un tanto asombrados y apesadumbrados por las noticias de vuestro país que llegan a través de los medios de prensa y que ahora nos relatan ustedes. Es una situación muy triste; es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo con el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y la violación constante de los derechos humanos.

Nosotros nos solidarizamos absolutamente con vuestro pueblo. La Cámara de Senadores dio a conocer hace alrededor de treinta días su posición con expresiones de solidaridad y de condena. La Cámara de Diputados no lo ha hecho aún, si bien lo hemos propuesto. Creo que esta va a ser una buena oportunidad para que nuevamente insistamos con este tema. Ya lo anunciamos con una declaración de apoyo, de solidaridad, que exhorta a todos los organismos internacionales la observancia y la protección de los ciudadanos que, como quienes nos visitan hoy, están informando sobre esa realidad, y que tanto ellos como sus familias corren riesgo. Yo estaba pensando qué va a pasar cuando ustedes vuelvan, y eso me preocupa. Estos regímenes tratan de eliminar a sus adversarios, a quienes se les oponen o a quienes denuncian la verdad.

Creo que es una buena oportunidad para que algunos de nosotros hagamos una propuesta -como Comisión reglamentariamente no lo podemos hacer-, y la semana que viene la presentemos al plenario de la Cámara de Diputados. Me refiero a una moción de apoyo, de solidaridad, exhortando a los organismos internacionales que presten la mayor atención sobre el trabajo que están haciendo los activistas, como lo son ustedes.

Lamentablemente, me tengo que retirar, como ya lo había anunciado, pero les he dejado mis contactos. En mi tarjeta les dejé escrito mi mail privado, no el oficial, para tener un contacto más personal, a efectos de contar con alguna información que pueda servir para ayudar a vuestra causa.

Cuenten con nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que acá se está dando un proceso de violación de los derechos humanos. Como sabemos, tanto Nicaragua como Uruguay forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay un compromiso en ese sentido. A la luz de lo que ustedes comentan y de las noticias que llegan, es obvio que está habiendo una violación de los derechos humanos.

Quiero hacerles algunas preguntas porque las versiones de prensa, que, a veces no reflejan totalmente la verdad.

Me gustaría que hicieran una evaluación sobre el funcionamiento de las mesas de diálogo. Aparentemente, se había montado una mesa de diálogo en la cual estaba mediando la Iglesia Católica. Da la sensación de que ha quedado desactivada, más allá de que la OEA llevó adelante algunas gestiones, según tengo entendido.

SEÑOR PARAJÓN (Yader).- La mesa de diálogo se instaura el miércoles 16 de mayo, y quien la propone en un primer momento es la iglesia. El mismo Daniel Ortega la aprueba y llama a la Iglesia a que sea la mediadora y testigo, con la intervención del gobierno y la sociedad civil.

En esa instancia, Ortega fue solo una vez; luego, manda una serie de delegados, y no se ve ningún tipo de voluntad política y comienza una etapa dilatoria del diálogo. Mientras se estaba dialogando, estaba habiendo muchachos asesinados. Estadísticamente, cada seis horas había un asesinado. Entonces, Daniel Ortega se encuentra de cierta manera acorralado por la sociedad civil que, como decía Ariana, ya no tiene la mayoría del pueblo, y viene sumando disidencias desde 1990. El pueblo se vuelca contra él debido a los muertos. Ortega se ve totalmente perdido y con una mesa de diálogo que no logra manipular. Antes del 18 de abril, la Iglesia jugó un papel en contubernio con él, pero al ver que el contexto superaba algo que no era meramente político, sino de derechos humanos, entonces, toma la decisión de ser mediadora y se pone a la par del pueblo. Eso le cuesta golpes y cortes a los obispos, así como al nuncio apostólico.

Cuando Ortega se ve en esa situación, suspende la mesa del diálogo. No tenía ninguna voluntad política; solo se hizo para los intereses de él. La sociedad civil no importaba; los muertos no importaban. Ante esta situación, lo que hace es llamar a los obispos golpistas, terroristas y satánicos; es decir, un desprestigio moral para no llevar adelante la mesa del diálogo. El único que la está deteniendo es Daniel Ortega, porque no está dispuesto a dialogar.

Haciendo una valoración, la mesa del diálogo es un instrumento necesario para acordar la salida ordenada, pacífica y democrática de Daniel Ortega; no se hizo en función de dar un golpe de Estado ni de que los militares intervinieran. De hecho, es lo que menos queremos. Lo que queremos es buscar una salida. La Iglesia y la sociedad civil propusieron una ruta de salida, una ruta de democratización. Los obispos fueron muy puntuales, propusieron la sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia y adelantar las elecciones. El obispo Rolando Álvarez propuso que se hagan en marzo de 2019, ya que es un Estado fallido.

El pueblo en general aplaudió el diálogo y condena que Ortega lo haya suspendido porque no se acomodó a su medida, como ha sido acomodada a su medida la Constitución.

Considero que la sociedad a nivel general quiere volver al diálogo, y muchas instituciones internacionales han pedido que haya buena voluntad para su salida. El diálogo fue aprobado por la mayoría del pueblo.

SEÑORA MCGUIRE VILLALTA (Ariana).- Quiero reflejar la falta de institucionalidad que hay en el país: no tenemos instituciones, ni autoridades. La iglesia está mediando un proceso de carácter internacional, porque no hay otra instancia en el pueblo nicaragüense que tenga un mínimo de credibilidad. Antes del 18 de abril, algunos sectores de la iglesia estaban en pacto con el Gobierno y otros eran críticos, que son los que se han mantenido dando la cara por el pueblo nicaragüense. Nosotros, como ciudadanía, creímos en el proceso histórico de diálogo nacional como una forma de evitar más muertes, pero como decía Yader, las muertes no se evitaban de ninguna manera, porque no hay una voluntad de parar los asesinatos; es un acto totalmente sociópata del presidente Daniel Ortega.

Los obispos fueron tildados de golpistas, de secta satánica, de diabólicos y los mandaron a hacerse exorcismos. Esto consta en comunicaciones oficiales del presidente y de la vicepresidenta.

Creemos que ya no podemos regresar a esa instancia de la mesa de diálogo nacional, simplemente, porque no podemos dialogar con una persona que simultáneamente nos está matando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tengo la sensación de que hay dos actores que no han actuado en este conflicto. Uno de ellos es el ejército. Más allá de que pueda haber fuerzas parapoliciales, tengo la impresión de que el ejército no ha actuado. Según la información que nos llega, solo han actuado la Policía y las fuerzas parapoliciales. Sería importante saber por qué no actúa, por la constitución orgánica que tiene el ejército nicaragüense.

El otro actor que no ha actuado es la oposición. Me gustaría saber si existe y cómo está jugando.

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- Oficialmente, no hay evidencias de que el ejército haya salido a las calles a reprimir a la gente, pero las armas y las municiones que se están utilizando solamente las tiene el ejército en Nicaragua. Se utilizan fusiles AK, fusiles PKM, lanza misiles RPG- 7, fusiles Dragunov, de francotirador. La Policía no tiene francotiradores; ese es un entrenamiento especial del ejército de Nicaragua. La mayoría de las personas fueron asesinadas con fusiles Dragunov, con tiros certeros de los francotiradores desde las instalaciones públicas, como el estadio nacional, las alcaldías municipales, etcétera.

Hubo dos comunicados oficiales del ejército en el que se expresa que el ejército no ha participado en la represión. Sin embargo, todas las municiones que se están utilizando son de alto calibre, son armas de guerra.

Supongamos que el presidente Daniel Ortega tiene razón y que los grupos paramilitares son fuerzas de la derecha, son grupos que quieren dar un golpe de Estado y quitar la paz a la ciudadanía. Asumamos que eso es así, aunque aclaro que no lo es. Si fuera así, ¿por qué el ejército no ha salido a parar a estos grupos paramilitares? Esa es su función. Hablamos de grupos armados en la calle. Es competencia del ejército de Nicaragua salir a desarmar a estos grupos para evitar las matanzas, los secuestros y las desapariciones forzadas. Sin embargo, no ha salido. Y no ha salido porque está bajo las órdenes directas de Daniel Ortega y porque toda la vida el interés del ejército ha sido económico; ellos mantienen un capital de inversión en Nicaragua, un capital de ingresos económicos producto de su *statu quo*. El poder del ejército es, sobre todo, económico.

Entonces, no ha salido ni por una cosa ni por la otra. Sin embargo, como decía, los francotiradores que están actuando y las municiones que se están utilizando no los tiene la Policía. Los grupos de paramilitares son grupos de personas encapuchadas. No sabemos quiénes son, pero en las abundantes fotos que existen se puede ver que las personas que forman estos grupos de encapuchados tienen una contextura física tal que denota cierto tipo de entrenamiento o trabajo; son profesionales.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Y la oposición?

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- No hay. A nivel de partidos políticos, no hay oposición. Desde hace una década no hay oposición en Nicaragua. Todos los partidos han sido cooptados por el Frente Sandinista. De alguna manera, por el nivel de corrupción y de ortodoxia que tienen estos representantes partidarios, se han adaptado muy fácilmente a los requerimientos de Daniel Ortega a cambio de prebendas económicas, a cambio de mantener megasalarios, exoneraciones de todo tipo, combustible, propiedades, etcétera.

De manera que no hay partidos de oposición. Por eso llegamos a este problema. La ciudadanía, los grupos estudiantiles, los grupos de bases sociales dejamos un poco la participación en temas políticos de incidencia nacional, precisamente, por no sentirnos representados por nadie. Entonces, los jóvenes pasamos a trabajar en cuestiones del medioambiente, de la cultura, cuestiones más cercanas a nuestro entorno y a nuestros intereses, pero no tuvimos participación política en la toma de decisiones de lo público porque no estábamos representados.

La oposición existe en la medida en que el pueblo se ha unificado, dado que casi el 80% de la población está en las calles. Todos los sectores sociales, todas las clases sociales de todo el territorio nacional están volcadas en las calles, pidiendo una sola cosa: que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejen el poder, que se desarmen los grupos paramilitares y se haga un proceso de refundación del Estado para tener, en principio, condiciones democráticas y, luego, condiciones de justicia sin impunidad.

La oposición en Nicaragua es una oposición popular, que surge de las bases sociales. Es superfuerte. Nunca habíamos visto esto antes. Es una oposición superfuerte, que está superclara con respecto a lo que quiere y a lo que ya no quiere.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a hacer una última pregunta: ¿cuáles serían los apoyos del régimen en este momento?

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- Las fuerzas armadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Y desde el punto de vista económico? ¿Cómo está jugando el empresariado?

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- El empresariado está jugando con un doble estándar. Hasta el 18 de abril mantuvieron una relación de alianza y de consenso con el Gobierno. Después del 18 de abril, con los primeros muertos y la cantidad de gente que estaba manifestando, el empresariado se pasa al lado del pueblo. Se conforma la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la que está liderando el diálogo, y se incluye a la empresa privada. En innumerables ocasiones durante estos cuatro meses, la ciudadanía ha pedido que la empresa privada deje de pagar los impuestos, que se declare en desobediencia fiscal, en desobediencia tributaria, porque esos impuestos representan más del 80% de lo que entran al Estado y gracias a esos ingresos se están financiando los grupos paramilitares. No digo que la empresa privada pague a los grupos paramilitares. Digo que la empresa privada sigue pagando impuestos al Estado, que representan la mayor cantidad de recursos que entra al Estado y que ese dinero es

utilizado con ese fin. Por eso hemos pedido a los empresarios que dejen de pagar impuestos, que no sigan inyectando economía al partido de Gobierno, porque está matando a la gente, está generando y manteniendo toda una maquinaria de represión, pero todavía no lo han hecho. Sin embargo, públicamente, se manifiestan en contra del Gobierno; públicamente, apoyan las marchas. Tienen una actitud medio *clientelar*. Es decir, si se necesita un sonido para la marcha, ahí está; si se necesitan cien platos de comida, dan quinientos; si se necesita un colchón, brindan una habitación de hotel. Esa es la forma en la que el empresariado trabaja, aunque por primera vez en la historia están poniéndose públicamente del lado de la población nicaragüense.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El proyecto de la Ley 840, del canal, funciona? ¿Es viable?

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- No; nunca ha sido viable; nunca va a funcionar. Eso fue una estratagema del Gobierno para expropiar territorios indígenas, territorios vírgenes, que no han sido explotados todavía y que tienen un costo invaluable. Son territorios protegidos por la ley de autonomía regional, que no pueden venderse, expropiarse, ni nada. Ha habido una serie de desplazamientos forzados de muchísimas comunidades indígenas, de comunidades ancestrales. En algunas de ellas quedarán unas ciento cuarenta familias; si se desplazan de ese lugar, se pierde totalmente su cultura y toda su herencia ancestral y étnica.

Lo que la ley del canal hizo fue entregar una concesión. En la ley se establece que si por alguna razón -cualquiera sea- el canal no se ejecuta, no se construye, Nicaragua será responsable y deberá pagar una indemnización por la mitad del costo total de la inversión en el canal al empresario chino. Eso está en la ley; no lo estoy inventando. Entonces, si no se hace el canal: "¡Ay, qué pena! Ahora tenemos que pagar a este señor". Y, tal vez, hacemos una repartición; estaría bien. Se debe pagar la indemnización porque la ley así lo establece.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por mi parte, no tengo más preguntas.

Tomaremos debida nota de esto.

Como decía el diputado Tabaré Viera, nosotros no emitimos una declaración en la Cámara de Representantes porque recién lo había hecho el Senado. Nos parecía más efectivo hacerlo en forma escalonada, es decir, primero el Senado y después nosotros, para que hubiera una continuidad. De manera de que casi con seguridad haremos una declaración.

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- ¿Cómo ven ustedes la situación?

SEÑOR PRESIDENTE.- Uno se guía por la información que viene de la prensa, por la que nos han dado ustedes, por la de la gente que ha estado allá. En las relaciones Estado- Estado está el principio de no injerencia en los asuntos internos de una nación

Además, Daniel Ortega fue electo democráticamente en una elección que no fue cuestionada públicamente en cuanto a su legalidad. No hubo denuncias de peso ante los organismos internacionales. Yo estuve en Nicaragua en la última elección, en 2016. Fui como delegado de Uruguay. Observé que había mucha abstención. Estuve en Managua y en León, y noté que había mucha abstención, aunque no vi disturbios. En León fui a tres o a cuatro escuelas y vi que había muy poca gente. No había entusiasmo por esa elección.

Como Estado, Uruguay puede manifestar su preocupación ante los organismos internacionales y ha acompañado las misiones que ha llevado adelante la OEA, pero

reitero que en las relaciones Estado- Estado se tiene que cuidar mucho la no injerencia en los asuntos internos.

En líneas generales, hay una preocupación. No cabe duda de que el Estado, en Nicaragua, ha hecho un abuso de la fuerza. Tiene el monopolio de la fuerza y ha hecho un abuso de ella. Podemos acompañar y hacer manifestaciones en cuanto a que es necesario el cese de este tipo de situaciones de violencia que se dan en el seno de la sociedad nicaragüense.

SEÑOR PARAJÓN (Yader).- ¿Cómo ven la propuesta que traemos de Chile, en el sentido de conformar una red de diputados y de diplomáticos para visitar y observar la realidad del país?

SEÑOR PRESIDENTE.- Este tema se va a plantear en la Cámara.

Les informo que nuestras comisiones y Cámaras sesionan del 1º al 18 de cada mes. Quiere decir que ahora estamos en receso de funcionamiento, pero no de trabajo. Seguramente, el 1º de setiembre este tema ingresará oficialmente a la Comisión de Asuntos Internacionales. Hoy los estamos recibiendo porque estaría mal que ustedes no fueran recibidos. Por gentileza y obligación, los recibimos.

Este tema se va a plantear. Seguramente, se comenzará haciendo una declaración. Manifestaré su inquietud. Les pido que nos dejen sus direcciones de correo electrónico. Diremos a todos los diputados que ustedes son la referencia para ponerse en contacto. Cumpliremos con ese mandato.

SEÑORA MCGUIRE (Ariana).- Les vamos a mandar la carpeta a la que hicimos referencia y un documento mejor elaborado de la propuesta que estamos generando en cuanto a la red de apoyo sudamericana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pondremos a disposición de los diputados de todos los partidos políticos el material que ustedes nos envíen. Es nuestra tarea.

También lo distribuiremos al Senado. Hoy no hay senadores en esta Comisión porque están aprobando una ley de mucha trascendencia; más de uno se excusó por no venir. Estaban muy interesados en concurrir, pero no pudieron. De todas formas, les haremos llegar todo el material.

SEÑOR PARAJÓN (Yader).- Les agradecemos por habernos recibido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos a las órdenes.

Se levanta la reunión.

